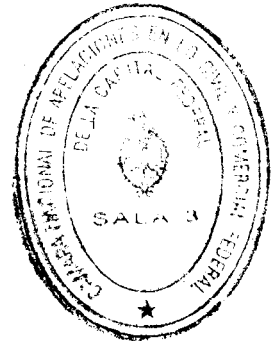


**Causa N° 2875/11 “Asociación Anestesia Analgesia y Reanimación de
Bs. As. s/ recurso de queja por recurso directo
denegado”**



Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (en adelante la Asociación) interpuso, en los términos del art. 476 del Código Procesal Penal, recurso de queja desde que por Resolución CNDC N° 33/11 (del 28-4-2011) se denegó la apelación deducida contra la Resolución CNDC N° 4/11 (del 8-2-2011). En esa última decisión, el organismo rechazó el pedido de nulidad formulado contra la Resolución CNDC 78/10 (del 15-6-2010).

Después de una reseña de los antecedentes del caso, la recurrente invoca, a los fines de fundar la queja, que el auto denegatorio es nulo de nulidad absoluta, de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema en “Credit Suisse”. Alega que la CNDC no tiene facultades legales para expedirse sobre la concesión o denegatoria de un recurso de apelación. Añade la Asociación que es irrazonable la denegatoria de la apelación, en cuanto se fundó en la falta de indicación del gravamen irreparable, desde que el traslado formulado en los términos del art. 32 de la ley 25.156 implica un grado de sospecha mayor al de una indagatoria (condición que, según la CNDC, es equivalente a la generada con el traslado del art. 29 de la LDC), a partir del cual el sumariado queda expuesto a cautelares de todo tipo.

Es síntesis, la recurrente afirma que el gravamen irreparable que le provoca el llamado del art. 32 surge “in re ipsa”.

2. La queja deducida en esos términos no es admisible.

Como primera cuestión, es oportuno señalar -respecto del art. 53 de la ley 25.156 y de su decreto reglamentario y de la doctrina de la Corte Suprema en la causa “Credit Suisse”, argumentos invocados por la recurrente en su apelación para que el organismo administrativo procediera sin otro trámite a elevar el expediente en el plazo allí fijado (ver fs. 51vta., ap. II, 73vta. y 82vta.)-

USO OFICIAL

que no se advierte la necesidad de que este Tribunal se pronuncie acerca de las facultades de la Comisión o del Secretario de Comercio Interior para conceder o denegar la apelación interpuesta -práctica inveterada desde la sanción de la norma y cuyo fundamento normativo puede encontrarse en la última parte del art. 52 de la LDC-, habida cuenta de que el recurso de queja permite la revisión judicial de ese acto mediante la intervención que se ha motivado. Ello importa que el pronunciamiento acerca de la procedencia formal del recurso no sea definitivo ni susceptible de generarle un gravamen irreparable en ese aspecto, máxime cuando en cualquier caso es la Cámara el juez del recurso con facultades para disponer sobre su admisibilidad más allá de los actos cumplidos en la anterior instancia.

3. Superada esa cuestión, corresponde decidir si la queja contiene fundamentos suficientes como para admitir, en el plano formal, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 4/11 (ver copia obrante a fs. 35/44 de esta queja), mediante la cual se rechazó la nulidad deducida por la Asociación contra la Resolución 78/10. En esta última se dio por concluida la instrucción sumarial y se corrió el traslado previsto en el art. 32 de la ley 25.156 para que efectuara su descargo y ofreciera la prueba pertinente (fs. 5/18).

Es decir, se debe determinar si la resolución recurrida es susceptible de generar un gravamen irreparable que justifique ampliar los supuestos previstos en el art. 52 de la LDC -entre los que no está incluida-, y de habilitar de ese modo la revisión judicial de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala a partir de la causa 2929/02 del 15-8-2002 (ver, asimismo, causas 9628/02 del 29-10-2002 y 1029/03 del 24-5-2004).

Ello es así, por cuanto en la Resol. 33/11 (fs. 68/72) se denegó la apelación con fundamento en que no se había invocado ni demostrado el gravamen irreparable que le genera a la Asociación la mencionada Resol. 4/11, en la medida de que ni dicha resolución ni la Resol. 78/10 tienen por consecuencia extinguir o impedir el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal. En esos términos, se precisó que la Resol. 78/10 no es definitiva desde que se limita a clausurar la etapa sumarial y a permitir el descargo y el ofrecimiento de prueba por la investigada, tal como lo hizo en el expediente administrativo. Asimismo, señaló la CNDC que se había admitido la prueba

ofrecida por la Asociación, que ésta tendría la posibilidad de alegar sobre la producida y, eventualmente, de apelar la decisión del Secretario que pusiera fin a la vía administrativa (ver fs. 70/71).

Tal criterio fue el que sostuvo el organismo administrativo en la Resol. 4/11 (ver fs. 39), en el sentido de que la Asociación, a pesar del planteo de nulidad, ejerció su derecho de defensa con el descargo y el ofrecimiento de prueba en los términos del art. 32 (fs. 42), además de haber llevado a cabo otros actos con posterioridad a la notificación de la Resol. 78/10, como por ejemplo la presentación en la audiencia de fs. 1949/51 y la información brindada a fs. 2008/2009 del expediente principal S01:0060577/2003 (C. 880), cuya copia certificada el tribunal tiene en este acto a la vista.

Ninguno de esos fundamentos ha sido suficientemente rebatido por la recurrente, desde que para sostener que la referida Resol. 4/11 le causa un gravamen irreparable se limita a invocar -haciendo una analogía con las normas del Código Procesal Penal, las cuales, cabe precisar, sólo resultan aplicables en forma supletoria y en cuanto fuesen compatibles con las disposiciones de la ley 25.156 (ver art. 56)- que el traslado del art. 32 de la LDC implica un grado de sospecha aún mayor que el del art. 29 de esa ley, lo cual la expone a cautelares de todo tipo (ver fs. 83). Y ello, además, sin valoración alguna de las normas específicas que regulan las distintas etapas del procedimiento que ya fueron cumplidas ante el organismo administrativo (arts. 29 y 30 de la ley 25.156) y disponen acerca del dictado de medidas cautelares (arts. 24, inc. m), y 35 de la LDC).

En síntesis, el escrito no contiene una explicación acerca de cómo el rechazo de la nulidad que apela la privó de ejercer debidamente su derecho de defensa, ni hace mérito alguno de las diversas presentaciones efectuadas con posterioridad al dictado de la Resol. 78/10 -entre ellas, el descargo y el ofrecimiento de prueba en los términos del art. 32 de la ley 25.156 que hizo en subsidio (ver fs. 25)-, con lo cual la recurrente no ha demostrado el gravamen irreparable que sostiene para fundar la queja.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:** desestimar la queja deducida por la Asociación.

CS

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, remítase copia de esta resolución a la CNDC mediante oficio y archívese.



GRACIELA MEDINA



RICARDO GUSTAVO RECONDO

SALA CIVIL Y COMERCIAL N° 3

Registrado al N° 300 T° 3

DEL LIBRO DE SENTENCIAS



CARLOS A. PETRE
SECRETARIO